

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 41**  
**O R D I N A R I A**  
**JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del jueves dieciséis de abril de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta ordinaria, celebrada el martes catorce de abril del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves dieciséis de abril de dos mil quince:

**I. 1046/2012**

Amparo directo en revisión 1046/2012, promovido por \*\*\*\*\* , por su propio derecho y como albacea de la sucesión a bienes de \*\*\*\*\* en contra de la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil once por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación 1151/2008-10. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Devuélvanse los autos relativos al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final del último apartado de esta ejecutoria.”*

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación del apartado V, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su cuarta interrogante. Indicó que se pregunta: ¿Es correcta la decisión del tribunal colegiado al declarar la inconveniencia del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal?; a lo cual el proyecto propone responder que el tribunal colegiado, atendiendo al resultado de las votaciones anteriores, no está en posibilidad de ejercer un control difuso de regularidad constitucional sobre dicha disposición, sin embargo, puede realizar un control concentrado en tres supuestos específicos: 1) que se advierta la petición expresa del quejoso, 2) que en la demanda aparezca una causa de pedir sobre esa cuestión y 3) que se supla la queja deficiente. La propuesta concluye que no se actualizó ninguno de esos supuestos, pues no se planteó la inconstitucionalidad de la norma en los conceptos

de violación, los planteamientos de la demanda contienen únicamente cuestiones de legalidad y que, de acuerdo al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, no se debe suplir la deficiencia de la queja. Por lo anterior, se propone devolver los autos al tribunal colegiado para que, sin decidir sobre la convencionalidad de la norma, dé respuesta a los conceptos de violación en los temas de legalidad que había dejado de contestar al haber inaplicado el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, a fin de dejar claro que, desde la demanda del juicio de origen, la actora sostuvo haber sufrido por sí misma una afectación a sus sentimientos por el padecimiento de su madre.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena adelantó que, al haber votado en contra de las interrogantes segunda y tercera, votará en contra de la cuarta por consecuencia, pues existe causa de pedir y se está en un control concentrado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó haber votado en contra de que se limite la posibilidad y atribución de los jueces de amparo para inaplicar incidentalmente normas generales inconstitucionales o inconvencionales, conforme a las razones dadas en la sesión pasada, en particular, porque se desatienden obligaciones internacionales del Estado Mexicano ante asuntos en donde hay una condena directa para que se establezca un control de convencionalidad/constitucionalidad *ex officio* de todas las autoridades jurisdiccionales del país, aunado a que este

criterio podría eventualmente generar ciertas distorsiones sistémicas para lograr un control cabal de constitucionalidad tratándose de derechos humanos. Adelantó que, por ende, votará en contra del proyecto en su totalidad y que no participará en la discusión de los efectos, al ser de la idea de que ese control incidental pueden realizarlo los tribunales colegiados.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recapituló haber opinado que no hay sustento constitucional ni convencional para diferenciar entre los órganos de impartición de justicia ordinarios y los que ejercen control concentrado, por lo que su voto sería integralmente en contra del proyecto. Sugirió en los efectos que, al ser mayoritario el criterio de que los órganos de control concentrado no pueden ejercer un control de convencionalidad *ex officio* sino cuando en el caso se alegara expresamente, hubiera causa de pedir o estuviere en el supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja, hasta ahí llegue el estudio y regrese los autos al tribunal colegiado para, sobre esa base, hacer su análisis, en razón de que el estudio de los antecedentes y demás aspectos que realiza el proyecto rebasa al amparo directo en revisión.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, al haber votado en contra respecto de los temas anteriores, indicó que votará en contra de todo el proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán se manifestó de acuerdo con las adiciones al proyecto hasta la contestación de la interrogante tercera, por concordar con la forma en que la

Segunda Sala ha abordado estos temas; sin embargo, se expresó en contra de la interrogante cuarta, pues si ya se determinaron nuevos lineamientos de interpretación, se debería reenviar el asunto al tribunal colegiado para que, en ejercicio de su propia competencia, emprenda el análisis de la demanda de garantías con la determinación tomada y, en consecuencia, resuelva lo conducente. En este sentido, sugirió que se elimine la interrogante cuarta.

El señor Ministro Medina Mora I. se pronunció en favor del sentido y de las consideraciones del proyecto, ya que no se da ninguno de los tres supuestos de procedencia para el ejercicio del control concentrado de convencionalidad y, por ende, no fue correcta la decisión del tribunal colegiado de declarar la inconvencionalidad del artículo en cuestión, por lo que procede revocar la sentencia y devolverle los autos para que realice un estudio de los conceptos de violación que omitió estudiar.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que el proyecto concluye que el tribunal colegiado no debió ejercer el control difuso, pero que no le exime de la posibilidad de analizar el artículo en cuestión a partir de un control concentrado, precisando que ello sería posible si hay un planteamiento de constitucionalidad, si se advierte una causa de pedir o si hubiera suplencia de la queja. Aclaró que dicho tribunal no hizo un análisis de constitucionalidad, sino sólo estudió acciones y excepciones, lo que no es propio de la materia constitucional de un juicio de amparo. Consideró que ambas

posturas son válidas: por un lado, estimó que el proyecto fue más allá al analizar si se presentaba alguno de los supuestos citados, por lo que podría omitirse dicho análisis, mas no eliminar la interrogante cuarta, para el efecto de que se devuelvan los autos al tribunal colegiado para que estudie y determine lo respectivo; pero, por otro lado, se trata de un amparo directo en revisión, en el cual se da la devolución de jurisdicción a esta Suprema Corte, razón por la cual la propuesta analiza los supuestos en comento y realiza el análisis correspondiente; por lo que deberá elegirse entre estas soluciones.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz aclaró que, dada la discusión pasada, entendió que el proyecto debería realizar un análisis integral por el medio de impugnación de que se trata, concordando en que se puede tomar cualquiera de los dos caminos y, por ende, pudiera también concluir la propuesta del proyecto con su párrafo setenta y seis y dejarlo en los siguientes términos: *“76. En todo caso, y en la línea de lo hasta aquí dicho, el Tribunal Colegiado solamente estaba en aptitud de resolver si el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal era inconvencional a partir de un ejercicio de regularidad constitucional concentrado, bien porque: a) hubiera habido un planteamiento de inconstitucionalidad en los conceptos de violación, b) en éstos se advirtiera una causa de pedir en ese sentido o c) haya sido el caso de suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo”*. En estos términos, estaría a la decisión mayoritaria del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales también estimó que se había acordado un estudio integral en la discusión pasada, además de que el Tribunal Pleno ha tomado decisiones similares en ambas vías, esto es, como una especie de atracción del asunto y para el efecto de devolución del caso al tribunal colegiado, por lo que no tendría inconveniente en cualquiera de las dos posturas.

El señor Ministro Pérez Dayán advirtió que, si se parte de la interpretación del tribunal colegiado, implicaría que como víctima de daño moral se pudiera entender tanto a la misma afectada como a sus familiares, lo que impactaría de distintos modos el ejercicio de la acción civil de carácter personal, en el sentido de que el albacea, como representante de la sucesión, no podría participar de un aspecto de daño moral. Ante ello, consideró conveniente que el tribunal colegiado se haga cargo de los conceptos de violación para, incluso, reflexionar sobre otros temas, entre ellos, si la sucesión tiene o no acción directa a partir de la nueva definición de la víctima del daño moral pues, de resolver esta Suprema Corte, se podrían dejar fuera muchas cuestiones como la relatada.

La señora Ministra Luna Ramos retomó que, tomando en cuenta las dos posibilidades definidas de solución, se tendría que tomar una votación para saber de qué forma concluirá el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales externó preocupación en el sentido de que varios señores Ministros

anunciaron voto en contra del proyecto, independientemente de la propuesta de solución, por lo que podría no alcanzarse la votación suficiente, recordando que en asuntos anteriores se estableció la necesidad de que, una vez alcanzada una mayoría, los demás integrantes se pronuncien en cuanto a temas posteriores.

El señor Ministro Silva Meza no compartió la conclusión del proyecto que establece estándares, pues el tribunal colegiado debió efectuar un control difuso de la norma en cuestión, por lo que tampoco compartió las consideraciones que indican lo contrario. Apuntó que en la demanda de amparo no existe *causa pretendi* concreta de que el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal es contrario a los derechos humanos, antes bien la quejosa exigió su debida aplicación, sin embargo, aún en el plano de legitimidad resulta imposible entablar la litis del amparo sin verificar que la norma jurídica sea o no adecuada a derechos humanos, al menos respecto del caso concreto, lo cual implica necesariamente su control difuso.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reiteró que, una vez tomada una decisión mayoritaria, los demás señores Ministros se deben someter a esa circunstancia y pronunciarse en relación con temas posteriores, aunque ello no coincida con su voto emitido pues, de lo contrario, no se alcanzaría una respuesta concreta mayoritaria.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó que, desde la sesión anterior, anunció voto integral en contra del



proyecto, siendo que el proyecto no tenía la adenda que se presentó en esta sesión. Recapituló que en la discusión previa se le pidió al ponente la inclusión al proyecto del estudio en cuestión para brindar mayor claridad de esta decisión a los tribunales colegiados, por lo que votaría en su favor únicamente por su inclusión, mas no con el análisis propiamente porque no debería hacerse en esos términos, pues son contradictorios a lo que votó anteriormente.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz reseñó que el señor Ministro Silva Meza considera que, en este caso, existe una causa de pedir, por lo que se puede realizar un control concentrado.

El señor Ministro Silva Meza aclaró que, contrario a lo que determina el proyecto, existe la posibilidad de realizar un control concentrado, por lo que votó en contra del análisis de la propuesta, no así de los supuestos para llevarlo a cabo, pues esos ya fueron votados.

El señor Ministro Pérez Dayán estimó que, tras la votación que decida la inclusión o no del estudio correspondiente, se debería brindar la oportunidad de reflexionar su contenido en caso de incluirlo y, en caso contrario, mantendría su posición en contra consistente en que sí es posible suplir la deficiencia de la queja.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz modificó el proyecto para concluirlo con el párrafo setenta y seis y dejarlo en los siguientes términos: “76. *En todo caso, y en la*

*línea de lo hasta aquí dicho, el Tribunal Colegiado solamente estaba en aptitud de resolver si el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal era inconvencional a partir de un ejercicio de regularidad constitucional concentrado, bien porque: a) hubiera habido un planteamiento de inconstitucionalidad en los conceptos de violación, b) en éstos se advirtiera una causa de pedir en ese sentido o c) haya sido el caso de suplir la queja deficiente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo”, con lo cual se abonarían los votos de los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I. y Pérez Dayán.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales estimó conveniente esta modificación del proyecto para someterla a votación.

El señor Ministro Franco González Salas mencionó que, a pesar de haber estado a favor de la propuesta original, votaría en favor de estas modificaciones, pues se trata de construir la mejor resolución como Corte, pero se separaría de algunas consideraciones conforme a sus votos sostenidos desde la sentencia al caso Radilla Pacheco.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consultó si la votación de esta modificación implicaría decidir si se realiza o no el estudio adicional y, en caso afirmativo, también se estaría de acuerdo con su contenido; indicando que, quienes estuvieron en contra del proyecto, tendrían que votar necesariamente en contra de la nueva propuesta.

El señor Ministro Pardo Rebolledo apuntó que, a pesar de la exhortación para votar los efectos quienes votaron anteriormente en contra, ya existe una mayoría consolidada en el aspecto de que, quienes estuvieron esencialmente con el proyecto, estarán en favor de esta nueva propuesta modificada y, en ese sentido, el resto podría votar libre e integralmente en contra del proyecto.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz propuso someter a votación el proyecto modificado en los términos que precisó.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado V, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su cuarta interrogante, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos con precisiones, Franco González Salas, Silva Meza, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Sánchez Cordero de García Villegas se manifestaron en contra. Los señores Ministros Luna Ramos y Silva Meza anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Cossío Díaz reservó su derecho de formular voto aclaratorio. El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho de formular voto concurrente. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea y Pardo Rebolledo anunciaron sendos votos particulares.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

**II. 25/2013 y  
Ac. 31/2013**

Acción de inconstitucionalidad 25/2013 y acumulada 31/2013, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, demandando la invalidez de los artículos 270 Bis 1 y 271, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el trece de septiembre de dos mil trece. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente Acción de Inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 270 bis 1 y 271 sexto párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial el trece de septiembre de dos mil trece, la que surtirá efectos a*

*partir de la fecha de notificación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.”*

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas realizó la presentación del asunto. Indicó que se impugnaron las normas que regulan la figura de la detención con control judicial, al considerarla contraria a diversos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Propuso someter a votación los apartados procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación.

El señor Ministro Medina Mora I. sugirió que en la legitimación se precise la fecha en que se designó a la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto es, el cinco de noviembre de dos mil trece.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas aceptó la sugerencia realizada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero (modificado) relativos, respectivamente, a

la competencia, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Medina Mora I. sugirió precisar, en el párrafo veintisiete, que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo valer la causa de sobreseimiento consistente en la inexistencia del artículo 271 Bis 1 y la falta de conceptos de invalidez del artículo 270 Bis 1; asimismo eliminar la tesis contenida en las páginas cuarenta y cuatro y siguiente, pues la obligación de corregir el error en la cita de los preceptos invocados deriva directamente del artículo 71, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas aceptó la sugerencia realizada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en

votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas realizó la presentación del considerando quinto, relativo al estudio de fondo respecto al artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. El proyecto propone establecer que la figura cautelar denominada detención con control judicial comparte características regulatorias, efectos, aplicación material, hipótesis para su aplicación, autoridades que la solicitan y obsequian y un grado de similitud normativa con la diversa medida cautelar de arraigo, por lo que se advierte que la Asamblea Legislativa reguló sobre una materia cuya competencia no le corresponde por mandato de la Constitución Federal, utilizando una sinonimia normativa bajo una denominación distinta.

Modificó el proyecto en su párrafo treinta y seis para ajustar la errata contenida, respecto del diverso artículo 40, relativo a la entrada en vigor de la declaratoria del Distrito Federal referente al sistema penal acusatorio.

Precisó que si la detención con control judicial comparte las mismas características del arraigo, y dado que en relación con éste se resolvieron las acciones de

inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, en las que se sostuvo que la facultad sustantiva únicamente es respecto de la delincuencia organizada a nivel federal y que el artículo décimo primero transitorio del decreto de reformas constitucionales de dos mil ocho no contiene una habilitación para que las autoridades estatales lo legislen, en consecuencia, la Asamblea Legislativa carece de competencia para legislar sobre la medida cautelar denominada detención con control judicial. Puntualizó que, en ese orden de ideas, la medida del arraigo únicamente puede ser decretada por los jueces de control federales y no por los jueces de control locales, de conformidad con los artículos 16, párrafo octavo, y 19 de la Constitución, por lo que de permitir que los jueces de control puedan autorizar órdenes de arraigo o cualquier otra medida cautelar de restricción a la libertad personal no expresamente contemplada por la Constitución, equivaldría a autorizarles una competencia de la que constitucionalmente carecen. Por tanto, resultan fundados los conceptos de invalidez y, por ende, se declara inconstitucional el artículo en cuestión.

El señor Ministro Cossío Díaz se pronunció respecto de los dos preceptos impugnados, en el sentido de que votará por su invalidez pero en contra de las consideraciones del proyecto, pues parten de una asimilación entre la detención con control judicial y el arraigo, en la inteligencia de que, por sí misma, la primera medida resulta violatoria de diversos artículos de la Convención, estimando no ser buen método el lógico hermenéutico propuesto.



El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró adecuado el estudio del proyecto al comparar las características esenciales del arraigo federal con la detención con control judicial de la legislación del Distrito Federal, sin embargo, en el precedente que se cita votó en contra porque el artículo décimo primero transitorio aludido sí otorga competencia a los Congresos estatales para regular el arraigo. Aclaró que en la Primera Sala ha votado obligado por el criterio mayoritario de este Tribunal Pleno, con sus respectivas aclaraciones, pero que como integrante de este Tribunal Pleno no está obligado en ese sentido y, por tanto, votará en contra del proyecto al estimar que la Asamblea Legislativa tiene competencia para regular la medida de detención con control judicial que se equipara en su naturaleza al arraigo. Preciso que la figura del artículo 270 Bis 1 se puede equiparar con el arraigo, pero que la del 271 no, puesto que se prevé dentro del proceso penal, lo que aportó como elemento de discusión.

La señora Ministra Luna Ramos se expresó a favor del proyecto y por la invalidez de los artículos combatidos, apartándose de las consideraciones porque, al tratarse de la materia penal, resulta de aplicación estricta, por lo que no se pueden esgrimir razones por mayoría o similitud de una figura con otra, máxime que la invalidez del proyecto deviene de un estudio comparativo entre la detención con control judicial y el arraigo. Sugirió eliminar el párrafo noventa y siete, puesto que en el asunto no hubo suspensión ni existe

un acto que invalidar con motivo de la aplicación de los artículos combatidos.

El señor Ministro Pérez Dayán se posicionó en favor de esta primera parte del estudio de fondo que declara la invalidez del artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sumándose al estudio comparativo, puesto que el tema de competencia es preferente, además de que ya existe un precedente de aplicación obligatoria, independientemente de que la figura en sí misma pudiera implicar algunas otras violaciones constitucionales.

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó a favor del proyecto en cuanto a la inconstitucionalidad de los dos preceptos, pero por razones distintas a las de la propuesta, dado que cuando se discutió el alcance del artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, se distinguió el arraigo de la prisión preventiva y, en este caso, independientemente de la denominación de las medidas, la detención con control judicial es inválida porque la Asamblea Legislativa carece de competencia expresa en la Constitución para legislarla, siendo que ésta es la única que puede establecer la forma, términos y plazos para afectar la libertad personal, dejando al legislador ordinario solamente su reglamentación, no su establecimiento. En este aspecto, precisó que las únicas restricciones legítimas a la libertad personal autorizadas por la Constitución y vigentes para el Distrito Federal son la detención en caso de delito flagrante,

la detención en casos urgentes, el arraigo, la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, la prisión preventiva y el arresto administrativo.

El señor Ministro Pardo Rebolledo aclaró que la figura del artículo 271 no se aplica en el proceso, sino durante la averiguación previa, insistiendo en que no tiene las mismas características que el arraigo porque tiene variantes tales como permitir acudir a su trabajo a la persona sujeta a la detención con control judicial. Señaló no compartir el proyecto desde la perspectiva de la incompetencia de la Asamblea Legislativa, pero reservaría y no comprometería su criterio al poder existir alguna otra razón de inconstitucionalidad de los preceptos en cuestión. Reiteró su voto en contra del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta y cinco minutos y reanudó la sesión a las trece horas con veinte minutos.

El señor Ministro Franco González Salas recordó haber sido quien también votó en contra de la tesis P./J. 32/2014 (10a.), pues conforme al sistema establecido a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, las entidades federativas sí pueden legislar en materia de arraigo conforme a su artículo décimo primero transitorio. Reservó su criterio para manifestarse en cuanto a los demás temas.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas indicó que, si es decisión del Tribunal Pleno,

eliminaría el estudio comparativo de la detención con control judicial y el arraigo, para mantener únicamente la invalidez de las normas impugnadas por falta de competencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea solicitó a la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas que precisara su propuesta.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que el proyecto determinará que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para legislar sobre la detención con control judicial al ser una medida restrictiva de la libertad no contemplada en la Constitución.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recapituló que, por una parte, se puede declarar la inconstitucionalidad de la detención con control judicial por falta de competencia de la Asamblea Legislativa al compartir características con el arraigo y, por otra parte, en razón de que se trata de una medida de restricción a la libertad personal no permitida en la Constitución.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recordó que, respecto de lo que expresó el señor Ministro Pardo Rebolledo, existe el precedente del arraigo en Chihuahua, el cual estimó aplicable, ya que se declaró inconstitucional no tras el análisis del artículo décimo primero transitorio citado, sino porque no existía en la Constitución, fijándose jurisprudencia en ese sentido, lo que podría tomarse en cuenta como solución para este asunto.

El señor Ministro Cossío Díaz concordó con el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena en que el análisis del asunto de Chihuahua fue completamente sustantivo, resultando entonces suficiente que no esté autorizada constitucionalmente la figura de la detención con control judicial cuya finalidad es restringir la libertad personal, además de que viola diversos preceptos de la Convención, pues determina que estas privaciones de libertad siempre tienen que ser dentro de proceso, siendo que la figura en análisis se presenta en la averiguación previa y la actuación del ministerio público, con independencia de que el juez participe de algunos de sus elementos, aunque esa es una posición minoritaria en este Tribunal Pleno.

El señor Ministro Pérez Dayán se refrendó por el sentido del proyecto, estimando que las dos posiciones expresadas para declarar la inconstitucionalidad del artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no riñen, sino que subsistirá en el cuerpo del proyecto aquella decisión que se determine en la votación respectiva. Aclaró que, en lo particular, participa de la idea de las similitudes entre la detención con control judicial y el arraigo y, por tanto, por su invalidez al carecer de competencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea apuntó que el proyecto original partió de la lógica de que el Tribunal Pleno ha determinado que las entidades federativas no pueden legislar el arraigo, entonces la Asamblea Legislativa

reglamentó una figura similar a éste pero con otra denominación para disimuladamente salvar el criterio de esta Suprema Corte, lo que técnicamente se le llama fraude a la Constitución; sin embargo, tratándose de una figura que viola contundentemente la Constitución y los derechos humanos constitucionalizados al restringir la libertad personal antes de proceso y sin garantías, este argumento tiene más fuerza porque no requiere de un análisis comparativo, por lo que consideró que debería ser la razón central del proyecto para declarar su invalidez.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que de la lectura del artículo 270 Bis 1 se advierte que es una limitación a la libertad que no está establecida en la Constitución, por lo que coincidió con el proyecto en cuanto declara su invalidez, mas no con las razones porque, para llegar a dicha declaración, hace un símil con el arraigo que, si bien muestra muchas semejanzas, también resalta muchas diferencias, siendo que en materia penal se debe tratar con figuras, competencias y tipos precisos. Ante ello, se inclinó por el argumento consistente en que la detención con control judicial no se encuentra dentro de las limitaciones al derecho de libertad personal contempladas en la Constitución. Adelantó que, de mantenerse el proyecto en sus términos originales, formularía voto concurrente.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas modificó el proyecto para declarar la invalidez del artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos

Penales para el Distrito Federal por contener una medida restrictiva de la libertad personal no prevista en la Constitución.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó de acuerdo con la invalidez a partir de la propuesta modificada del proyecto.

El señor Ministro Silva Meza compartió la propuesta modificada, pues contiene una razón constitucional de fondo porque se trata de una restricción a un derecho humano no contemplado en la Constitución ni en los derechos humanos de fuente internacional.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio de fondo respecto al artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas y Presidente Aguilar Morales reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Pérez Dayán apuntó que también se cuestionó la constitucionalidad del artículo 271, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, recordando que introduce una modalidad en la figura que no es coincidente con el arraigo, pues prevé que, durante la averiguación y con ciertas condiciones, la persona detenida en su domicilio podría trasladarse a su trabajo, por lo que lo consideró más una medida cautelar del orden civil que se otorga por el juez para garantizar un bien jurídico tutelado diferente. No obstante, estimó que dicho precepto no podría soportar un examen constitucional, pero bien pudiera ser que con un motivo de reflexión diverso.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que los efectos no pueden quedarse como una notificación general pues, de acuerdo al artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, por tratarse de una norma penal, deben precisarse los efectos retroactivos para aquellos casos vinculados con las normas declaradas inconstitucionales, coincidiendo con la propuesta del proyecto en que dichos efectos deben darse a partir del catorce de octubre de dos mil trece, conforme al contenido de su página noventa y siete.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que en las acciones de inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013 se determinó que las ejecutorias producirían efectos a partir de la fecha de entrada en vigor de las normas inválidas y para que, en cada caso, correspondiera al



juzgador determinar qué pruebas pudieron haberse afectado con la detención, lo que consideró conveniente.

El señor Ministro Pérez Dayán insistió en que, de la lectura contextual del artículo 271, no se trata de la misma figura contenida en el diverso artículo 270 Bis 1 y ni siquiera es similar al arraigo, sino que se trata de una detención muy particularizada de quien es sujeto a una averiguación. Adelantó que, de no tomarse en cuenta esto, lo formularía en un voto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales estimó que no existe diferencia en cuanto al lugar en donde se prive de la libertad a una persona pero, si así lo determina el Tribunal Pleno, se puede analizar este punto.

El señor Ministro Cossío Díaz aclaró que, al discutir el considerando quinto que analizó el artículo 270 Bis 1, también se estaba refiriendo al considerando sexto que estudia el 271, párrafo sexto, y que estas razones llevaban a la inconstitucionalidad de ambos preceptos, situación por la cual se votó el proyecto en su integridad. Estimó conveniente aclarar si se votaron o no los dos considerandos citados. Concordó con el señor Ministro Presidente Aguilar Morales en que, sin importar el lugar en el que se realice, ambos preceptos prevén la privación de la libertad personal.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales también consideró que se habían votado los considerandos quinto y

sexto en relación con la misma medida de privación de la libertad.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió en haber entendido que se votaron los dos considerandos, pues se tomaron en cuenta los precedentes de esta Suprema Corte que protegen la libertad personal, en el sentido de que sus restricciones deben estar en la Constitución, independientemente de la denominación que reciban.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que, cuando votó, entendió que se hacía integralmente respecto del proyecto; sin embargo, indicó que valdría la pena valorar la medida del artículo 271 en los términos señalados por el señor Ministro Pérez Dayán, pues se refiere a otras circunstancias. Adelantó considerar que ambas figuras son parte de lo mismo, pero que si un integrante del Tribunal Pleno tiene una visión distinta ello debería ser motivo de una discusión y, en su caso de una votación.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó atendible la petición del señor Ministro Pérez Dayán, indicando que también observó diferencias entre los artículos 270 Bis 1 y 271, párrafo sexto, siendo esta última también una medida restrictiva de la libertad, pero que pudiera estimarse hasta como un beneficio pues, en lugar de estar detenida la persona en una institución ministerial, podría estar en su domicilio y acudir a su trabajo con restricciones, por lo que ameritaría un estudio diferenciado el referido artículo 271.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó continuar con la discusión de este asunto para la siguiente sesión y que continúe en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes veinte de abril de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".